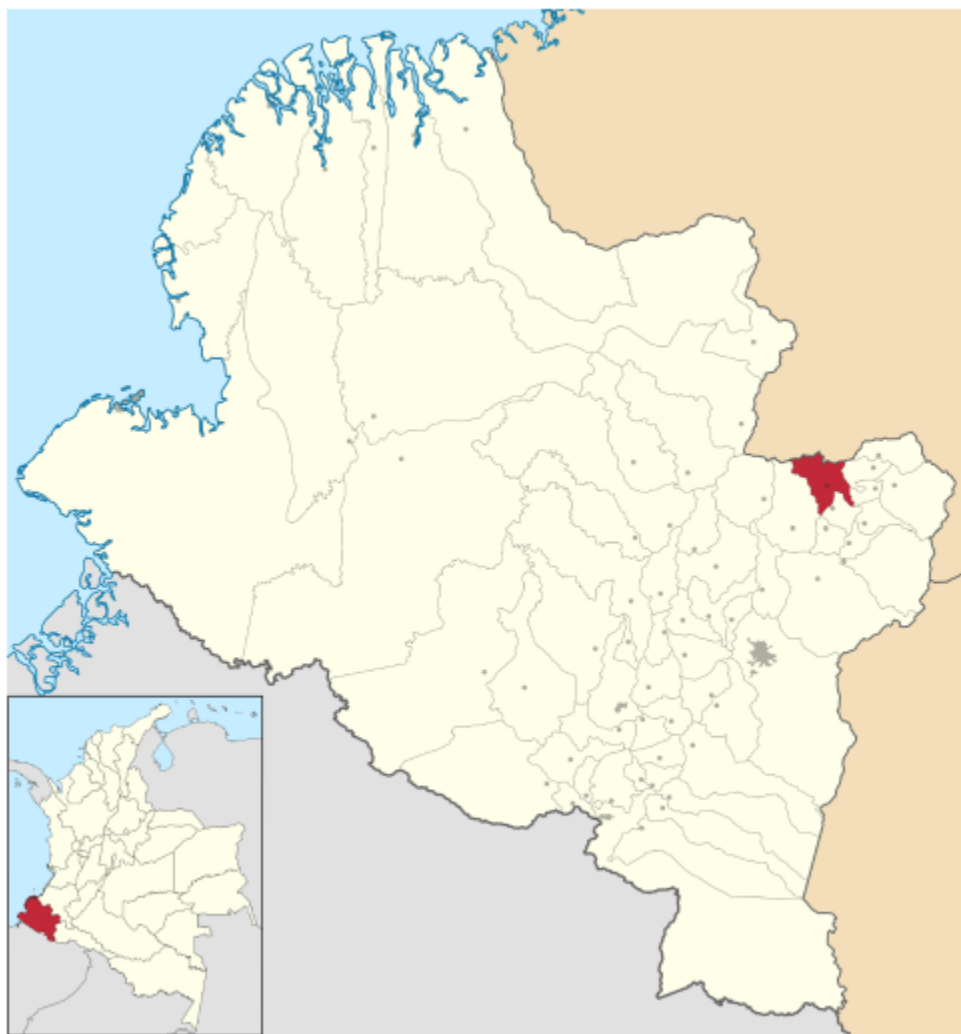


### 3. Cobertura territorial y distribución de la población sujeto de caracterización

El municipio de La Unión, ubicado en el nororiente del departamento de Nariño, hace parte de la subregión del Juanambú y se extiende sobre un área de 147 kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente el 0,4 % de la extensión total del departamento (DNP, 2014). Su posición geográfica lo ubica a 92 km de San Juan de Pasto, limitando al norte con el departamento del Cauca, al sur con San Pedro de Cartago, al oriente con Belén, Colón, Génova y San Pablo, y al occidente con San Lorenzo.



*Ilustración 1: Ubicación geográfica de La Unión, en el departamento de Nariño. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020 (CEDRE, 2024, p. 8).*

Su territorio se caracteriza por una topografía montañosa perteneciente a la cordillera Occidental de los Andes, con relieves accidentados, valles interandinos y suelos volcánicos fértiles de textura franco arenosa, favorables para la agricultura. Estas condiciones físicas, unidas a la diversidad de pisos térmicos –frío, medio y cálido– determinan una estructura productiva predominantemente agropecuaria, con cultivos permanentes de café, plátano, caña, cítricos y ganadería doble propósito.

Administrativamente, el municipio se divide en nueve corregimientos que agrupan 45 veredas, además de una cabecera urbana conformada por 31 barrios (CEDRE, 2024). Esta organización refleja una clara predominancia rural: según las proyecciones del DANE para 2024, el 59,9 % de la población (20.030 habitantes) reside en el área rural y solo el 40,1 % (13.426 habitantes) en la cabecera municipal. Esta distribución territorial evidencia un modelo de asentamiento disperso, donde las veredas funcionan como núcleos sociales y productivos, mientras que la zona urbana concentra las actividades administrativas, comerciales y de servicios.

La siguiente tabla muestra la división político-administrativa rural de La Unión y su superficie estimada:

Corregimiento	Veredas principales	Superficie (km²)
La Alpujarra	La Alpujarra, Palo Verde, Villa María, La Cañada, El Salado	8,08
Quiróz	Quiróz Alto, Quiróz Bajo, Olivos, Llano Grande, La Playa	46,83
La Caldera	La Caldera, La Betulia, El Peligro, Ojo de Agua, El Cerrito	12,91
Chaguarurco	Chaguarurco, La Jacoba, El Diviso, Pradera, Piedra Branca, La Castilla	23,21
Santander	Santander, Cuchillas, Pielas Blancas, La Cumbre, El Boquerón, El Jardín	8,93
Juan Solarte Obando	Juan Solarte Obando, Reyes, El Guabo, La Esperanza	6,96
El Sauce	Sauce Alto, Sauce Bajo, Contadero, Chical, Rincón Cusillo	11,87

<b>Corregimiento</b>	<b>Veredas principales</b>	<b>Superficie (km²)</b>
Los Cusillos	Cusillo Alto, Cusillo Bajo, Chical Alto, Bella Vista, Las Palmas	19,27
Peña Blanca	Peña Blanca, Buenos Aires, La Fragua, La Merced	—

*Ilustración 2: División político-administrativa rural de La Unión y su superficie estimada. Fuente: Elaboración propia.*

De acuerdo con estimaciones proyectadas por DANE, en 2024 La Unión tenía una población de 33.456 habitantes, de los cuales 16.893 eran mujeres (50,5 %) y 16.563 hombres (49,5 %). Esto representa aproximadamente el 2 % de la población total del departamento de Nariño. La cifra muestra además una población ligeramente envejecida: en 2024 los adultos mayores (60 años o más) eran 5.861 personas, lo que representa un 17,5 % del total.

En comparación, un documento de contexto del municipio señalaba que para 2023 la población era de 33.262 personas, lo que implica un crecimiento moderado en el tiempo reciente. La densidad poblacional aproximada, tomando 33.456 habitantes sobre ~147 km², arroja cerca de 227-230 habitantes por km², lo cual es relativamente alto para una zona con predominancia rural. Esta densidad sugiere que, pese a su naturaleza rural, La Unión tiene una concentración demográfica suficientemente significativa como para generar demanda de servicios, infraestructuras y actividades productivas con escala local.

Un aspecto clave en la caracterización poblacional es cómo se reparte la población entre cabecera, área urbana, y veredas o corregimientos, área rural. Algunas fuentes reportan que aproximadamente el 59,9 % de la población está en la zona rural, unos 20.030 habitantes, mientras que el 40,1 % en la zona urbana, alrededor de los 13.426 habitantes.

Esta distribución plantea varios retos. El primero es que la mayoría de la población vive en zonas dispersas, lo que dificulta la cobertura de servicios de infraestructura, conectividad, agua y saneamiento; el segundo es que la cabecera municipal concentra menos de la mitad de la población, aunque puede concentrar la mayor parte de servicios institucionales, comercio y de salud; finalmente que las dinámicas rurales predominantes imponen una lógica de desarrollo territorial diferente: movilidad, accesibilidad, economía de subsistencia, y patrones de vida más ligados al entorno natural y productivo.

Así mismo, la población presenta leve mayoría femenina (50,5 %). En edades específicas, por ejemplo, los menores de 12 años en 2024 eran 4.816, lo que representa el 14,4 % del total. Los adolescentes (12-17 años) sumaban 2.602 personas (7,8 %). Finalmente, los mayores de 18 años alcanzan un 77,8 % del total. Estos datos evidencian un perfil de población mayoritariamente adulta, lo cual es consistente con procesos de envejecimiento y de migración juvenil hacia zonas urbanas o externas al municipio.

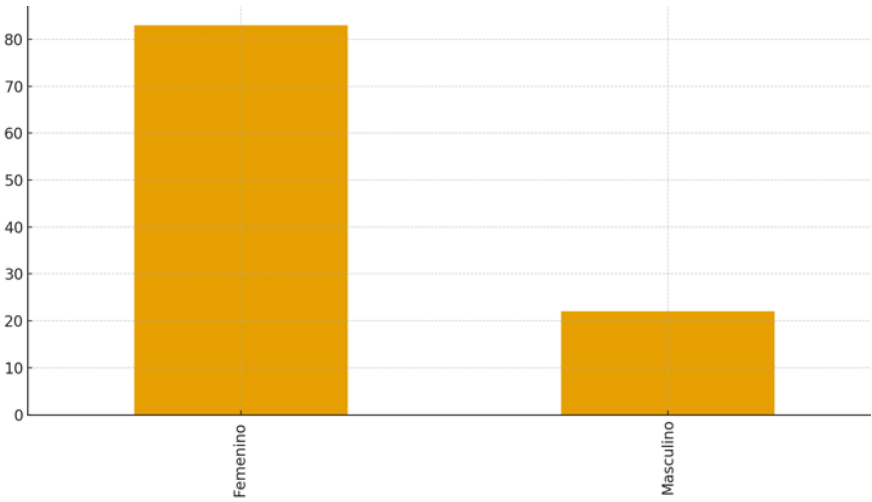
En este contexto, el Programa “Diálogos en Frontera” del Ministerio de Minas y Energía (2025) desarrolló un proceso de caracterización territorial y social orientado a comprender las dinámicas de la comercialización informal de combustibles líquidos y sus implicaciones socioeconómicas y de ello se desprende el siguiente análisis.

### **3.1 Cobertura del ejercicio**

El ejercicio de caracterización se desarrolló en el municipio de La Unión, Nariño, e incluyó la recolección de 105 encuestas aplicadas tanto en la cabecera municipal como en nueve corregimientos y su red de veredas. Esta cobertura permitió obtener una muestra representativa del territorio, capturando no solo las dinámicas urbanas, sino también la complejidad económica y social que se vive en zonas rurales dispersas. La información cuantitativa fue complementada con el análisis de documentos oficiales del municipio, como el Diagnóstico Socioeconómico de UDENAR (2024), el Perfil socioeconómico de La Unión, Nariño (2018) y la Ficha Municipal del DNP (2014), lo que permitió contrastar los datos de la encuesta con tendencias estructurales ya identificadas para La Unión. La cobertura amplia, tanto territorial como temática, garantiza que los hallazgos representen fielmente el contexto y los desafíos actuales de la población.

Así, tenemos que La composición demográfica de la población encuestada evidencia una marcada presencia femenina, ya que más del 70% de los registros corresponden a mujeres. Este predominio confirma que ellas son quienes sostienen la mayoría de pequeños negocios y actividades económicas de subsistencia, especialmente en sectores como comercio, belleza, preparación de alimentos y servicios domésticos. En cuanto a la edad, la población se concentra principalmente entre los 25 y 54 años, con mayor presencia en el grupo de 30 a 45 años, lo que coincide con la etapa de mayor actividad laboral, en contraste, la participación de jóvenes menores de 25 años y de personas

adultas mayores es baja, lo cual sugiere que el trabajo informal responde más a estrategias de sostenimiento familiar que a procesos de inserción laboral juvenil.



*Ilustración 3: Distribución por género en La Unión, Nariño. Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Caracterización del municipio de La Unión.*

Finalmente, aunque no todas las encuestas incluyen el estado civil, se identifica una proporción importante de mujeres que asumen la jefatura del hogar, algo coherente con los relatos sobre la necesidad de equilibrar las responsabilidades de cuidado con las actividades económicas, especialmente en zonas rurales donde su participación es aún más visible.

### 3.2 Distribución Territorial

La distribución territorial de la población encuestada muestra un panorama complejo y profundamente revelador sobre cómo se organiza la vida económica y social en La Unión. Aunque cerca del 60 % de las personas viven en la zona urbana, este dato no debe interpretarse como una urbanización predominante; por el contrario, confirma un equilibrio dinámico entre la cabecera municipal y los corregimientos rurales. Los datos del CEDRE (2024) y del DNP (2014) han sido consistentes al señalar que la ruralidad sigue siendo la base estructural del municipio, y esta encuesta lo reafirma al evidenciar que un 40% de la población reside en veredas y corregimientos, muchos de ellos dispersos y de difícil acceso.

Este equilibrio no es homogéneo, puesto que cada territorio expresa realidades distintas, por ejemplo, sabemos que en la cabecera municipal convergen las actividades comerciales más visibles como tiendas de ropa, cosméticos, comidas preparadas, peluquerías, papelerías, ventas por catálogo y servicios varios. En estas zonas se percibe un mayor acceso a redes de comunicación, tránsito peatonal constante y relación directa con instituciones públicas y privadas. Sin embargo, esta actividad económica se sostiene en su mayoría desde la informalidad y bajo condiciones de trabajo precario.

En contraste, las zonas rurales como Quiróz, Los Cusillos, Chaguarurco y El Sauce presentan dinámicas de vida marcadas por la dispersión geográfica, los tiempos prolongados de desplazamiento y la limitada infraestructura vial. Los informes de contexto del municipio describen estas áreas como territorios donde los caminos veredales se deterioran con facilidad y donde los servicios públicos, como el acueducto, saneamiento e internet, presentan coberturas bajas o intermitentes. Este escenario territorial condiciona las actividades productivas y evidencia que la agricultura familiar sigue siendo el sustento principal, complementada con pequeñas tiendas, ventas de víveres, comercio por encargos y, en algunos casos, la venta informal de gasolina, especialmente en puntos estratégicos donde los motociclistas pasan entre veredas.

La venta de combustible informal es un indicador clave para comprender la relación entre territorio y economía. Esta práctica aparece principalmente en corregimientos donde las distancias entre la vereda y la estación de servicio más cercana superan los 45 minutos o incluso una hora de camino. La necesidad de abastecer motos, el principal medio de transporte rural, convierte esta actividad en una especie de “servicio comunitario” que, aunque informal y riesgoso, resulta funcional para la vida cotidiana rural.

En términos de movilidad, los corregimientos más grandes, como Quiróz (46,83 km<sup>2</sup>) y Chaguarurco (23,21 km<sup>2</sup>), presentan una extensión territorial que no solo dificulta el acceso físico, sino también la llegada regular de programas institucionales, capacitaciones y oferta estatal. La dispersión poblacional genera brechas significativas en el acceso a formación laboral, conectividad digital y oportunidades económicas, lo cual se refleja en niveles más bajos de educación y en menor diversificación de actividades productivas. Mientras que en la zona urbana las personas pueden complementar ingresos con servicios o ventas por catálogo, en el área rural las opciones dependen fuertemente de la temporada agrícola y la movilidad disponible.

Este análisis territorial revela que la distribución entre urbano y rural no solo es un dato demográfico, sino un factor determinante de desigualdad. Los habitantes rurales enfrentan barreras más pronunciadas para acceder a mercados, capacitación, servicios financieros y tecnologías digitales. La mayor parte de los emprendimientos rurales funciona como actividades de subsistencia, sin capital de inversión, sin acceso a crédito y sin acompañamiento técnico. Por otra parte, la cercanía de la cabecera municipal promueve redes comerciales más constantes, aunque también reproduce dinámicas de competencia precaria y saturación en los mismos tipos de negocio.

En síntesis, la distribución territorial de la población encuestada refleja un municipio con dualidades profundas, donde la urbanidad concentra comercio y servicios, y la ruralidad sostiene la producción agrícola y actividades complementarias para resolver las necesidades básicas de las comunidades. Este patrón reitera la importancia de diseñar intervenciones diferenciadas para cada territorio, considerando sus ritmos, barreras, potencialidades y formas de organización cotidiana.

### **3.3 Interpretación General**

El análisis conjunto de las encuestas, las observaciones en campo y los documentos institucionales revisados revela que La Unión es un territorio donde la vida económica está íntimamente ligada a las condiciones sociales, culturales y geográficas del municipio. Su economía es diversa, sí, pero está atravesada por un rasgo estructural que la define: la informalidad. Esta informalidad no debe entenderse únicamente como ausencia de formalización legal, sino como un modo de organización del trabajo profundamente adaptado a las realidades y limitaciones locales. Es, en muchos sentidos, la forma en que la población responde a un contexto donde el empleo formal es escaso, la movilidad es limitada y las expectativas de ingresos o formación calificada son inestables.

En este escenario, las mujeres desempeñan un papel central. No solo constituyen la mayor parte de las personas encuestadas, sino que además sostienen, como ya se anotó, los pequeños negocios que alimentan la economía cotidiana, como las ventas por catálogo, la preparación de alimentos, espacios de peluquería y estética, comercio de ropa, misceláneas y otras actividades que, aunque pequeñas y muchas veces invisibles, aseguran la subsistencia de sus hogares. Su participación no se restringe al espacio urbano, puesto que en las zonas rurales, ellas también desempeñan labores agrícolas,

llevan tiendas comunitarias o incluso participan en actividades atípicas como la venta informal de gasolina. Esta presencia femenina desafía roles tradicionales y evidencia procesos de empoderamiento silencioso, aunque todavía marcados por desigualdades en acceso a recursos, tiempo y oportunidades.

La multifuncionalidad rural emerge como otro rasgo distintivo. En los corregimientos, la mayoría de familias no depende de una sola actividad, sino de combinaciones que cambian según la temporada, los precios, las lluvias, la demanda y la movilidad. Se cultiva café o plátano por la mañana, se atiende una tienda al mediodía, se vende gasolina o víveres por encargo en la tarde (CEDRE. 2024) y se realizan otros servicios cuando surge la oportunidad. Este esquema revela una economía de supervivencia altamente flexible, donde el valor no está en la especialización sino en la capacidad de diversificación.

La movilidad es uno de los elementos que más condiciona estas dinámicas. La motocicleta se ha convertido en la columna vertebral del desplazamiento en el municipio y, como tal, permea no solo la vida familiar, sino también la economía. Gracias a ella, se transportan personas, productos, insumos agrícolas, mercancías de vereda a vereda y se abastecen los negocios rurales. A su vez, su uso intensivo crea nichos económicos como la venta informal de combustible, que surge ante la falta de estaciones formales en zonas dispersas y se convierte en un servicio esencial para la comunidad. Así, la movilidad motorizada no solo transforma las dinámicas productivas, sino también las relaciones sociales y los patrones de consumo. La informalidad, por tanto, no es un problema aislado sino un sistema adaptativo que responde a la estructura territorial del municipio, a su geografía montañosa, a la desigual distribución del acceso a nuevas tecnologías y a la precariedad histórica en servicios públicos y oportunidades de empleo. En muchos corregimientos, por ejemplo, la falta de conectividad limita el acceso a formación, comercio digital y oportunidades de desarrollo económico, perpetuando la dependencia de actividades de baja rentabilidad. En otros casos, la cercanía a la cabecera municipal genera competencia intensa entre pequeños negocios que ofrecen los mismos productos a márgenes reducidos.

Finalmente, las prácticas económicas, sociales y culturales se entrelazan para formar una economía de resistencia, donde cada familia crea estrategias múltiples para garantizar la estabilidad mínima. La creatividad en los negocios, la organización comunitaria, la agricultura de autoconsumo, la venta móvil y la multiplicidad de ocupaciones son reflejos de una población que ha aprendido a sostenerse frente a brechas históricas que aún



persisten. Esta interpretación revela que, en La Unión, la economía no es solo un fenómeno técnico, sino más bien, una expresión de cultura, adaptabilidad y lucha cotidiana, convirtiendo al municipio en un espacio ideal para generar escenarios donde se implementen políticas de reconversión económica, con enfoques diferenciales y que tengan en cuenta la identidad cultural de los y las habitantes.

#### **4. Perfil Socioeconómico y Laboral - Municipio de La Unión**

El perfil socioeconómico y laboral del municipio de La Unión revela un entramado productivo complejo, sustentado mayoritariamente en el trabajo independiente y en economías informales de baja escala. Los datos recolectados mediante la encuesta indican que entre el 85% y el 90% de las personas trabajan por cuenta propia, lo que coincide plenamente con los diagnósticos de las demás fuentes consultadas, donde se señala que el empleo formal en el municipio es escaso y está concentrado principalmente en instituciones educativas, comercio establecido, administración pública y algunos servicios particulares.

Este predominio del autoempleo surge como respuesta directa a la falta de alternativas laborales estables. La Unión no cuenta con un sector empresarial amplio ni con industrias generadoras de empleo formal. La economía municipal, como lo mencionan los estudios académicos, se ha sostenido históricamente en la agricultura, principalmente café, plátano, caña y cítricos, el comercio minorista y los servicios personales, actividades que no absorben suficiente mano de obra ni ofrecen condiciones laborales estandarizadas. Esta estructura fragmentada y dispersa del mercado laboral empuja a gran parte de la población hacia actividades económicas flexibles, que pueden realizarse desde el hogar, en espacios reducidos o incluso en la vía pública.

El análisis de la encuesta confirma este patrón. La actividad más frecuente es el comercio informal de pequeña escala, que representa entre el 60% y el 65% de las ocupaciones reportadas. Las personas venden ropa, cosméticos, productos de aseo, alimentos preparados, frutas, artesanías, artículos para el hogar y casi cualquier bien de consumo cotidiano. Estas ventas suelen ser de baja rentabilidad, pero de rotación constante, lo que permite generar ingresos diarios para cubrir alimentación, transporte y gastos básicos del hogar. La venta itinerante y las ventas desde el hogar son estrategias recurrentes, especialmente entre las mujeres, quienes buscan compatibilizar el trabajo con el cuidado.

El sector de servicios personales, que representa alrededor del 20% de la actividad económica en la muestra, refuerza esta idea de una economía centrada en la satisfacción de necesidades inmediatas del territorio. Oficios como peluquería, estética, costura, cocina por encargo y limpieza emergen como alternativas laborales accesibles para quienes no cuentan con formación avanzada ni con capital para montar negocios más robustos. La informalidad en estos sectores facilita la entrada al mercado, pero también genera precariedad al no existir contratos, estabilidad, ingresos fijos o protección social.

La agricultura familiar, con una participación del 15% al 20%, sigue siendo una de las bases económicas en los corregimientos. Los hogares combinan cultivos permanentes con economías de autosubsistencia, complementando sus ingresos con actividades comerciales informales. La estacionalidad agrícola, seguramente marcada por los ciclos del café y otros productos, obliga a diversificar fuentes de ingreso, lo cual explica la proliferación de tiendas en las veredas, ventas de víveres, pequeños talleres, transporte informal y, en algunos casos, la venta de gasolina. Esta diversificación no es una elección sino una necesidad surgida del riesgo productivo y de la inestabilidad del precio de los cultivos.

El nivel educativo de la población también influye directamente en este perfil laboral. La mayoría posee únicamente bachillerato completo o incompleto, con una proporción reducida de personas que han accedido a formación técnica, tecnológica o universitaria. Tanto Gordillo (2018) como el CENDRE (2024) ya habían identificado esta brecha, señalando que solo un 3% de los bachilleres de La Unión logran avanzar a la educación superior. Esta limitación afecta la posibilidad de acceder a empleos formales o de emprender negocios más sofisticados, profundizando el ciclo de informalidad. Además, se trata de una economía de baja capitalización, donde muchos negocios operan con ingresos diarios que apenas permiten reponer inventarios pequeños, sin excedentes para ahorrar, invertir o mejorar sus condiciones operativas. La falta de acceso a crédito, agravada por la informalidad, refuerza esta trampa económica. El microcrédito, aunque disponible en ciertos casos, es percibido por la población como riesgoso debido a los intereses, las cuotas fijas y el temor al endeudamiento en contextos tan vulnerables.

De este modo, el perfil socioeconómico de La Unión no es solo un reflejo de carencias estructurales, sino como se mencionó antes, también muestra una profunda capacidad de adaptación. Las personas se reinventan constantemente para mantenerse activas en un entorno laboral limitado. Sin embargo, esta resiliencia tiene un costo y es la precarización

del trabajo, la sobrecarga para las mujeres, la ausencia de seguridad social, la falta de protección frente a crisis económicas y la dependencia de actividades informales que no siempre son seguras o sostenibles, como ocurre con la venta de combustibles o la logística de transporte informal.

En síntesis, el municipio presenta una economía viva y en movimiento, pero marcada por barreras históricas que impiden a la mayoría de su población avanzar hacia mejores condiciones laborales. Este perfil socioeconómico debe ser el punto de partida para diseñar estrategias de intervención que reconozcan la realidad cotidiana del territorio y promuevan alternativas laborales dignas, sostenibles y compatibles con la vida familiar y comunitaria de La Unión.

#### **4.1 Condiciones de Vulnerabilidad**

Las condiciones de vulnerabilidad son evidentes tanto en la zona urbana como rural, aunque se intensifican en esta última. La combinación entre bajos niveles educativos, precariedad laboral, ausencia de contratos formales y dificultades para acceder a servicios públicos profundiza los riesgos sociales y económicos. La falta de conectividad digital, especialmente en corregimientos, limita el acceso a información, mercados y oportunidades de formación. La alta carga de cuidado que recae sobre las mujeres, sumada a las restricciones de movilidad, reproduce desigualdades que dificultan su participación plena en la vida económica. En zonas rurales, el aislamiento geográfico, la falta de transporte estable y la creciente necesidad de actividades complementarias como la venta informal de gasolina incrementan la dependencia de economías informales para garantizar ingresos mínimos.

#### **Jefatura del Hogar y Estructura Familiar**

Uno de los hallazgos más significativos es la elevada proporción de mujeres jefas de hogar. La encuesta muestra que una parte considerable de las participantes se reconoce como responsables directas de su núcleo familiar, lo cual se confirma también en los documentos oficiales del municipio. Estas mujeres suelen financiar el hogar mediante actividades de comercio desde casa, preparación de alimentos, estéticas y oficios varios. La estructura familiar es diversa: familias monoparentales, hogares extendidos y unidades

domésticas compuestas por varias generaciones conviven bajo un mismo techo. Esta diversidad refleja la capacidad adaptativa de la población y la función social clave que cumplen las redes familiares en contextos de alta informalidad económica.

### **Víctimas del Conflicto y Discapacidad**

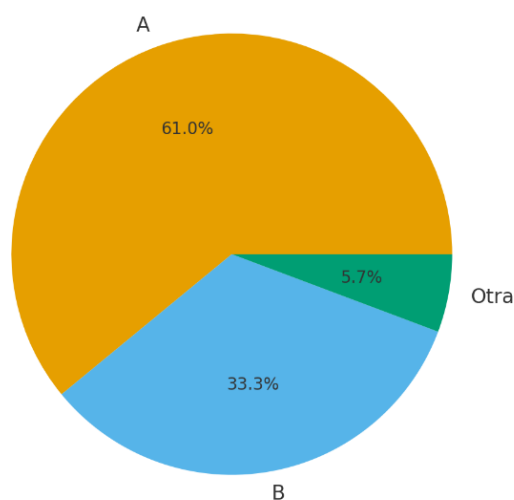
La presencia de víctimas del conflicto armado en la muestra, aunque no mayoritaria, confirma que La Unión sigue siendo un territorio donde los efectos de la violencia han dejado huellas significativas. Los datos recolectados coinciden con las estadísticas históricas de la Red Nacional de Información, que identifican al municipio como un punto tanto de expulsión como de recepción de población desplazada en distintos momentos del conflicto. Esto se refleja en relatos de familias que han debido reconstruir sus medios de vida desde cero, generalmente a través de actividades informales de comercio o agricultura.

En cuanto a la discapacidad, aunque los casos identificados no son numerosos, representan situaciones que requieren atención diferenciada. Las personas con movilidad reducida o condiciones congénitas enfrentan barreras adicionales para acceder a empleo, formación y servicios institucionales. Esta dificultad es aún mayor en las zonas rurales, donde las distancias, el estado de las vías y la limitada disponibilidad de transporte hacen que la exclusión sea más marcada. En conjunto, la presencia de víctimas y personas con discapacidad evidencia la necesidad de enfoques más sensibles y accesibles dentro de cualquier estrategia de desarrollo local.

### **Clasificación SISBEN**

La clasificación SISBEN de la población encuestada, con una presencia predominante en los grupos A y B, confirma que la mayoría de los hogares en La Unión se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica. Esta tendencia es coherente con lo reportado por el Departamento Nacional de Planeación y por el Diagnóstico Territorial del CENDRE (2024), donde el municipio registra un Índice de Pobreza Multidimensional significativamente elevado, especialmente en las áreas rurales. El Índice de Pobreza Multidimensional, recordemos, no solo mide los ingresos, sino también carencias en educación, salud, vivienda, empleo y acceso a servicios básicos en el municipio, en el que

varias de estas dimensiones muestran rezagos persistentes que afectan directamente la calidad de vida de la población.



*Ilustración 4: Clasificación del SISBEN en La Unión, Nariño. Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Caracterización del municipio de La Unión.*

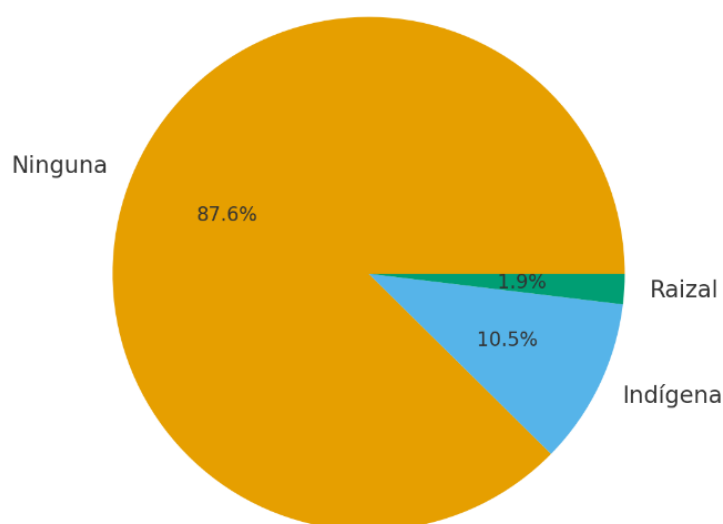
La alta proporción de personas clasificadas en niveles bajos del SISBEN es un reflejo directo de estas privaciones. En concreto, los hogares rurales presentan mayores carencias en condiciones de vivienda, acceso a agua potable, infraestructura vial y conectividad digital. La baja escolaridad formal observada en la encuesta, con predominio de bachillerato incompleto o solamente la culminación de la primaria, agrega otra capa de vulnerabilidad que limita el acceso a trabajos formales y restringe la posibilidad de movilidad social. Aunque el SISBEN facilita la entrada a programas sociales como Familias en Acción, Red Unidos o subsidios al régimen subsidiado de salud, esto no siempre se traduce en una mejora efectiva de las condiciones económicas estructurales.

Gran parte de las personas encuestadas depende del trabajo informal, lo que se alinea con las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional relacionadas con la informalidad laboral, la inestabilidad del ingreso y la ausencia de protección social. La informalidad se vuelve, por tanto, una estrategia de supervivencia más que una opción económica. Esta situación refleja que, aun cuando los beneficios del SISBEN alivian

ciertas necesidades inmediatas, no logran compensar la falta de empleo estable ni las barreras para emprender procesos de formalización o capacitación laboral.

En conjunto, lo anotado en este apartado, muestra que La Unión enfrenta un círculo de pobreza multidimensional donde se combinan la ruralidad, la precariedad educativa, el limitado acceso a servicios públicos y la dependencia de actividades informales de baja productividad. Este diagnóstico resalta la necesidad de intervenciones integrales que no solo brinden asistencia, sino que fortalezcan capacidades, mejoren la infraestructura y amplíen las oportunidades laborales reales para la población, especialmente para las mujeres y para quienes viven en los corregimientos más aislados.

### **Pertenencia Étnica y Diversidad Cultural**



*Ilustración 5: Pertenencia étnica en La Unión, Nariño. Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Caracterización del municipio de La Unión.*

La información recopilada muestra que la mayoría de las personas encuestadas no se identifica con un grupo étnico específico, lo que refleja la predominancia de una identidad campesina mestiza, característica de buena parte del norte de Nariño. Sin embargo, la presencia de personas que se reconocen como indígenas, aunque minoritaria, es significativa porque evidencia la permanencia de raíces culturales andinas que pueden influir en prácticas productivas, vínculos comunitarios y formas de organización social.

Esta diversidad cultural observada, aunque no tan visible como en otros municipios del departamento, se puede expresar en elementos cotidianos como el uso de semillas tradicionales, la transmisión oral de conocimientos agrícolas, las dinámicas de solidaridad vecinal y la importancia simbólica de la tierra. Los patrones de trabajo colectivo, como las mingas, los arreglos comunitarios de vías o los apoyos en cosechas, siguen presentes, especialmente en los corregimientos más rurales. Asimismo, la identidad campesina fortalece el sentido de pertenencia al territorio, orienta la economía familiar hacia la autosuficiencia y marca una forma de relacionarse con el entorno basada en la cooperación y el cuidado mutuo. En conjunto, la composición étnica y cultural del municipio no solo describe quiénes habitan el territorio, sino que también ayuda a entender por qué persisten formas productivas tradicionales, por qué la asociatividad es más informal que estructurada y por qué las prácticas comunitarias siguen siendo un soporte fundamental en la vida económica y social de La Unión.

#### **4.2 Dinámica de la práctica de combustibles**

La venta informal de gasolina en el municipio de La Unión, aunque numéricamente minoritaria dentro de la muestra, con solo una persona de las 105 encuestadas, si debe tenerse en cuenta como una actividad profundamente entrelazada con las condiciones socioeconómicas, geográficas y de movilidad del territorio. Su presencia no responde únicamente a una lógica de informalidad económica; por el contrario, emerge como una *respuesta funcional y adaptativa* ante vacíos estructurales diagnosticados en múltiples fuentes oficiales del municipio.

Los documentos técnicos analizados, coinciden en señalar que La Unión presenta una combinación de factores que favorecen la aparición de esta práctica, alta ruralidad, dispersión poblacional, movilidad motorizada intensiva y baja cobertura de infraestructura de combustibles en los corregimientos. De acuerdo con el CENDRE (2024), más del 59,9 % de la población reside en el área rural, distribuida en 9 corregimientos y 45 veredas, muchos de ellos alejados hasta 10 o 15 kilómetros de la cabecera. Esta geografía accidentada, sumada a la limitada presencia de estaciones de servicio formales, ubicadas principalmente en la zona urbana, genera una dependencia natural hacia mecanismos alternativos de abastecimiento. Las motocicletas, como confirma el mismo informe,

constituyen el principal medio de transporte en la ruralidad, siendo empleadas para actividades agrícolas, movilidad comunitaria y distribución de productos locales.

En este contexto, la venta informal de gasolina se convierte en un servicio comunitario esencial más que en un negocio orientado a la acumulación, cumple más bien, una función logística real, la de abastecer motos y herramientas para asegurar la continuidad de actividades productivas como la cosecha de café, la distribución de mercancías, el transporte hacia escuelas o centros de salud y la conexión entre veredas. Este rol estructural explica por qué la práctica se concentra en corregimientos como Quiróz, Los Cusillos y Chaguarurco, identificados por el CENDRE como zonas extensas, dispersas y con vías secundarias cuya transitabilidad depende del clima y del estado del terreno.

Una dimensión especialmente relevante es la participación femenina en esta actividad. Si bien, en la muestra el individuo que acepta que comercia con gasolina es un hombre, y a pesar de que tradicionalmente esto se ha percibido como un oficio masculino, los datos de otras fuentes revelan que muchas veces son las mujeres quienes participan en la venta de combustible, generalmente desde tiendas rurales o puntos de comercio que combinan víveres, abarrotes y gasolina. Esta participación femenina, también observada por Gordillo (2018), se vincula con estrategias familiares de supervivencia económica en entornos con baja escolaridad y limitado acceso a empleo formal. Las mujeres, en muchos casos, operan estas ventas porque forman parte de la red de servicios indispensables de sus veredas, o porque diversifican ingresos para enfrentar la estacionalidad de los cultivos agrícolas.

Sin embargo, la venta informal de gasolina implica riesgos significativos. El DNP (2014) advierte sobre problemas asociados al almacenamiento inadecuado de combustibles, la inexistencia de medidas de seguridad, la exposición a incendios y la afectación al ambiente por derrames. Estos riesgos se intensifican en viviendas o locales improvisados donde se almacena gasolina en galones o botellas reutilizadas. A estos riesgos se suman otros relacionados con el orden público: el flujo de gasolina informal puede ser objeto de controles policiales, decomisos o tensiones por regulaciones de transporte.

A pesar de ello, la persistencia de la práctica no debe ser interpretada como una conducta marginal, sino como una manifestación de la economía adaptativa rural del municipio. Las familias que comercializan gasolina lo hacen porque el territorio lo exige y porque el mercado formal, por distancia, costos o disponibilidad, no responde a sus necesidades.



Esta comprensión territorial y socioeconómica es fundamental para plantear estrategias de política pública realistas, pues más que eliminar la práctica de manera inmediata, los documentos de desarrollo recomiendan avanzar hacia procesos de reconversión productiva gradual, que ofrezcan alternativas viables, seguras y socialmente aceptables: microtiendas rurales, servicios técnicos para motocicletas, micrologística veredal, puntos de venta formalizados de insumos agrícolas o incluso esquemas comunales regulados.

En síntesis, la dinámica de venta informal de combustibles en La Unión no es un fenómeno aislado ni fortuito, es un síntoma de la ruralidad profunda del municipio, de la fragilidad de su infraestructura, del peso de la movilidad motorizada en su sistema económico y de la necesidad de las familias de complementar sus ingresos mediante actividades que respondan a la realidad territorial. Su análisis es central para comprender las estrategias de vida rurales y para diseñar intervenciones que no solo regulen la práctica, sino que protejan el bienestar y los ingresos de quienes dependen de ella.

#### **4.3 Formación, Capacitación y Reconversión Laboral**

Los datos de la encuesta muestran un interés importante de la población en acceder a procesos de formación en comercio, ventas, servicios personales, fortalecimiento de pequeños negocios y actividades relacionadas con la economía cotidiana del territorio. Esta demanda no surge de manera aislada, sino que como se ha venido observando, responde directamente a las condiciones educativas y laborales identificadas en La Unión.

Según Gordillo (2018), la mayoría de la población cuenta con niveles educativos medios o bajos, predominando la primaria y el bachillerato incompleto, con un acceso muy limitado a estudios técnicos o universitarios. Este dato se conecta con lo hallado por el CENDRE, donde se señala que el tránsito de los jóvenes hacia la educación superior es muy reducido, y que el territorio presenta una brecha educativa estructural, especialmente en la ruralidad (2024). Estas condiciones explican por qué la capacitación técnica y práctica se convierte en una necesidad urgente. La población no pide formación académica extensa, sino procesos aplicados, cortos y directamente relacionados con los oficios que ya desempeñan. Las mujeres, que representan la mayoría de la fuerza económica informal del municipio según nuestra encuesta, más del 70%, expresan interés en capacitaciones que les permitan mejorar sus pequeños emprendimientos, aprender

manejo básico de negocios, digitalización de ventas, contabilidad sencilla y servicios como belleza, cocina o comercio al detal.

El *Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023* también subraya que la oferta institucional de formación en el municipio es fragmentada y, en muchos casos, inaccesible para la población rural debido a limitaciones de transporte, horarios rígidos y baja conectividad digital (2020). La Universidad de Nariño (2024) corrobora esta brecha señalando que muchos corregimientos carecen de conectividad estable, lo que imposibilita acceder a cursos virtuales o plataformas educativas. Esto obliga a que los procesos de capacitación deban considerar la movilidad reducida, la dispersión geográfica y la logística del territorio.

Además, la reconversión laboral, especialmente para las personas dedicadas a actividades informales de riesgo, como la venta de gasolina, requiere programas de formación que se orienten a alternativas económicas viables y sostenibles. Varias de las fuentes técnicas revisadas resaltan que la informalidad en el municipio presenta un carácter estructural, asociado a la falta de industrias, al bajo acceso a crédito y a la dependencia de actividades de baja rentabilidad. Esto implica que no basta con capacitar: se necesita acompañar procesos de transición económica que permitan a las personas abandonar prácticas riesgosas y adoptar modelos de negocio más seguros y rentables, tales como, tiendas pequeñas rurales formalizadas, servicios de mantenimiento de motocicletas, en respuesta a la alta movilidad motorizada, agricultura con valor agregado, producción artesanal con cadenas de comercialización, servicios logísticos en las veredas, ventas digitales o híbridas.

Ahora, un elemento clave para el éxito de cualquier intervención es el enfoque de género. La carga de cuidado que recae sobre las mujeres, documentada por el CENDRE (2024) y validada en observaciones de campo, limita su disponibilidad horaria y su participación en procesos presenciales. Por ello, la capacitación debe contemplar temas como horarios flexibles, metodologías presenciales cercanas al territorio, espacios de cuidado infantil o apoyo logístico, estrategias de aprendizaje comunitario en las veredas.

En conjunto, la formación y la reconversión laboral en La Unión deben ser concebidas como un proceso gradual, territorial y sensible a las barreras reales del municipio. La evidencia recogida muestra que las personas quieren capacitarse, pero necesitan que la oferta se adapte a sus condiciones de vida, enmarcada en temas de movilidad limitada, baja conectividad, responsabilidades familiares, estacionalidad agrícola e ingresos

inciertos. Responder a estas condiciones es clave no solo para mejorar sus capacidades, sino también para abrir caminos hacia economías más dignas, seguras y sostenibles.

#### **4.4 Asociatividad y Capital Social**

La asociatividad en La Unión, aunque no aparece de manera explícita en las encuestas, se evidencia en las dinámicas cotidianas del territorio y en los diagnósticos institucionales. Las comunidades rurales mantienen formas de organización basadas en la solidaridad campesina, donde las redes familiares y vecinales cumplen un papel central para resolver problemas de movilidad, seguridad, trabajo agrícola y apoyo en emergencias. Esta forma de capital social, más relacional que institucional, es especialmente visible en corregimientos como Quiróz, Los Cusillos y Chaguarurco, donde la dispersión geográfica obliga a que las familias se apoyen mutuamente para trasladar cosechas, reparar vías o coordinar actividades productivas.

Sin embargo, tanto el diagnóstico del CENDRE (2024) como el trabajo realizado por Gordillo (2018) coinciden en señalar que, pese a esta fortaleza comunitaria, la formalización de asociaciones productivas es baja en el municipio. Esto limita la capacidad de los pequeños productores y comerciantes para acceder a programas de fortalecimiento económico, líneas de crédito, compras públicas o procesos de certificación. La ausencia de estructuras asociativas formales también hace que muchos negocios rurales operen de manera aislada, con poca capacidad de negociación y con dificultades para llegar a mercados más amplios.

En este contexto, la asociatividad, especialmente la que puede surgir entre mujeres comerciantes y productores rurales, representa una oportunidad estratégica. El capital social existente podría convertirse en una base sólida para impulsar organizaciones económicas más estructuradas, que permitan compartir recursos, generar compras y ventas colectivas, reducir costos logísticos y dar mayor estabilidad a los pequeños negocios. Fortalecer estas formas de organización no solo ampliaría las oportunidades económicas, sino que también contribuiría a una mayor cohesión social y a la sostenibilidad de las iniciativas locales.

Ahora, en cuanto al capital social del municipio de La Unión, podemos caracterizarlo por la fortaleza de sus redes familiares y comunitarias, un rasgo que aparece tanto en los datos del trabajo de campo como en los diagnósticos institucionales del municipio. Los

documentos del CENDRE (2024) indican que, en la zona rural, las familias no solo funcionan como unidad doméstica, sino como un soporte económico y emocional fundamental. Esta observación coincide con lo encontrado en el trabajo de campo, la mayoría de tiendas, ventas de comida, comercio por catálogo o pequeños talleres, son emprendimientos familiares donde varias personas participan, comparten ingresos o alternan turnos. Esta forma de organización garantiza la subsistencia en un contexto marcado por la informalidad y la precariedad laboral.

En los corregimientos, el capital social se expresa mediante prácticas colectivas tradicionales, como mingas para mejorar caminos, arreglos comunitarios de infraestructura o apoyo mutuo durante las cosechas. Tanto el diagnóstico territorial del CENDRE (2024) como el perfil socioeconómico de Gordillo (2018) señalan que estas prácticas continúan siendo esenciales debido a la dispersión geográfica y las dificultades de movilidad. En muchos sectores rurales, como se ha anotado anteriormente, especialmente Quiróz, Los Cusillos y Chaguarurco, las comunidades se organizan para resolver problemas comunes ante la limitada presencia institucional. Este capital social comunitario funciona como una forma de gobernanza local y garantiza la continuidad de actividades agrícolas y comerciales. Así mismo, la economía del municipio también está sostenida por redes informales de cooperación. El diagnóstico del DNP (2014) describe a La Unión como un municipio con alta informalidad económica, lo que confirma que gran parte de la actividad productiva depende de relaciones de confianza entre vecinos, comerciantes y productores. Las encuestas recogidas muestran que el *fiar* sigue siendo un mecanismo extendido en tiendas rurales y urbanas, y que existe un intercambio constante de insumos, créditos informales y apoyo en logística.

Un componente importante del capital social de La Unión es el rol que desempeñan las mujeres. Tanto el Plan de Desarrollo Municipal (2020–2023) como la encuesta aplicada para este trabajo indican que las mujeres lideran la mayoría de pequeños negocios y sostienen redes de apoyo que combinan trabajo productivo y cuidado. Ellas intercambian clientelas, comparten consejos sobre sus emprendimientos y apoyan a otras mujeres en actividades como estética, cocina, ventas por catálogo y tiendas. Esta dimensión del capital social femenino no solo dinamiza la economía local, sino que también fortalece la cohesión social y la resiliencia comunitaria en un municipio donde más del 70% de las personas encuestadas son mujeres activas laboralmente.

A pesar de este tejido social robusto, la asociatividad formal sigue siendo débil. Los datos arrojados por Gordillo (2018) evidencian que pocas organizaciones productivas están formalizadas en el municipio, y que la mayoría de actividades económicas se desarrollan de manera individual o familiar. La falta de asociaciones limita la capacidad para negociar mejores precios, acceder a programas de fomento productivo, participar en compras públicas o recibir acompañamiento técnico. Esta ausencia de estructuras organizativas forma parte del desafío actual del municipio, pues el capital social existe, pero permanece informal y disperso.

Finalmente, los documentos revisados también revelan una gran diferencia entre la confianza interpersonal, muy fuerte en barrios y veredas, y la confianza institucional. La población tiende a organizarse entre vecinos para resolver problemas antes que acudir a entidades públicas, debido a experiencias previas de baja respuesta institucional o demoras en la llegada de proyectos a los corregimientos. Esta brecha es consistente con lo señalado por el CENDRE (2024), donde se afirma que la dispersión geográfica y la limitada presencia estatal en zonas rurales generan la percepción de que la comunidad debe arreglárselas por sí misma.

#### **4.5 Síntesis e Implicaciones Estratégicas**

El análisis integral del municipio de La Unión evidencia un territorio profundamente marcado por su ruralidad, por una estructura económica basada casi por completo en la informalidad y por la centralidad del trabajo femenino en la sostenibilidad de los hogares. La distribución territorial, con una fuerte presencia de población rural dispersa, condiciona el acceso a servicios, la movilidad y el desarrollo de actividades productivas. Las brechas históricas en educación, infraestructura vial, conectividad digital y acceso a empleo formal se entrelazan con una economía que depende de negocios pequeños de baja capitalización, muchos de ellos liderados por mujeres que deben conciliar el trabajo con las labores de cuidado.

Los niveles de pobreza multidimensional, documentados por variadas fuentes reflejan un municipio donde las carencias no se limitan al ingreso, sino que atraviesan dimensiones críticas como educación, vivienda, salud, empleo y acceso a servicios básicos. Esta realidad explica la alta presencia de población en grupos A y B del SISBEN y la necesidad de estrategias integrales que aborden simultáneamente la vulnerabilidad social y la

precariedad económica. La informalidad laboral, identificada como un elemento estructural tanto en la encuesta como en otros diagnósticos no solo describe la falta de empleos formales, sino la forma en que las familias han construido mecanismos de supervivencia adaptados a la geografía y las oportunidades del municipio. Así mismo, la dinámica productiva rural se sostiene en una multifuncionalidad que combina agricultura, comercio informal, servicios personales y actividades complementarias como la venta informal de combustibles. Aunque esta última actividad aparece en un porcentaje reducido de la población, cumple un papel estratégico en la movilidad rural, donde las motocicletas funcionan como herramienta de trabajo, transporte y logística cotidiana. Por ello, cualquier intervención en este campo debe considerar la función que cumple la actividad en la cadena productiva local y las alternativas viables para quienes dependen de ella.

El capital social del municipio es una de sus mayores fortalezas: redes familiares robustas, prácticas comunitarias como las mingas, cooperación vecinal y una identidad campesina cohesionada. Sin embargo, estas formas de capital social aún no se traducen en procesos de asociatividad formal que permitan acceder a mercados más amplios, programas de fomento productivo o esquemas colectivos de comercialización. Existe, por tanto, una brecha entre la organización comunitaria natural y la capacidad institucional para consolidar organizaciones económicas sostenibles.

A partir de este panorama integral, surgen varias implicaciones estratégicas para el desarrollo del municipio. En primer lugar, se requieren estrategias diferenciadas por territorio, que consideren las realidades de la cabecera urbana y de los corregimientos dispersos. La ruralidad demanda intervenciones en movilidad, infraestructura, acceso a servicios y fortalecimiento de economías agrícolas. En segundo lugar, es indispensable un enfoque de género, no solo para reconocer el papel económico de las mujeres, sino para reducir las barreras que enfrentan en tiempo, movilidad, cuidado e ingreso. Tercero, la transición económica debe orientarse hacia la reconversión laboral gradual, con programas de formación adaptados a las condiciones reales de la población: flexibles, prácticos, cercanos al territorio y con soporte para la digitalización básica.

Finalmente, el fortalecimiento del capital social existente, mediante asociatividad, cooperativismo, redes productivas y acompañamiento institucional, puede transformar las dinámicas económicas actuales en oportunidades sostenibles. La Unión tiene un potencial humano y comunitario enorme; sin embargo, convertirlo en desarrollo requiere cerrar brechas históricas, articular políticas públicas con las realidades del territorio y construir

estrategias que reconozcan la vida cotidiana de quienes hoy sostienen la economía local. Esta síntesis ofrece, así, una ruta para orientar decisiones y proyectos enfocados en mejorar las condiciones de bienestar, productividad y cohesión social del municipio.

## **5. Recomendaciones Finales**

El proceso de caracterización territorial y socioeconómica desarrollado en el municipio de La Unión permitió identificar una comunidad resiliente, trabajadora y fuertemente unida por redes familiares y comunitarias que sostienen gran parte de la economía local. A pesar de las brechas estructurales que enfrenta el territorio, especialmente en educación, conectividad digital, movilidad rural y acceso a empleo formal, se evidencia una disposición significativa de la población para capacitarse, emprender y transitar hacia modelos económicos más sostenibles y seguros. Este diagnóstico integral evidencia que La Unión, aunque marcada por la informalidad y la vulnerabilidad multidimensional, cuenta con recursos sociales y humanos valiosos que pueden fortalecer su desarrollo.

En este sentido, una recomendación central es el fortalecimiento de las capacidades locales mediante programas de formación ocupacional, reconversión laboral y certificación de saberes en articulación con el SENA, la Alcaldía Municipal y las organizaciones comunitarias. Estos procesos deben adaptarse a las condiciones específicas del territorio, especialmente para mujeres que tienen una alta carga de cuidado y para la población rural con limitaciones de movilidad. La formación debe priorizar áreas como el comercio local, la gestión de pequeños negocios, la transformación agrícola, los oficios comunitarios, la digitalización básica y el mantenimiento de motocicletas, considerando que este medio de transporte es clave para la vida económica rural.

Asimismo, es fundamental impulsar proyectos productivos asociativos que permitan fortalecer la economía local mediante la organización colectiva. La creación de asociaciones de productores rurales, grupos de mujeres emprendedoras y colectivos comerciales puede mejorar la negociación de precios, reducir costos, ampliar mercados y facilitar el acceso a asistencia técnica y financiamiento. Este proceso debe acompañarse de formación administrativa, apoyo en formalización progresiva y vinculación a cadenas productivas existentes en el municipio como el café, el plátano y los productos agropecuarios. Otra recomendación estratégica consiste en consolidar un mecanismo permanente de articulación institucional que vincule a la Alcaldía, el SENA, el Ministerio

de Minas y Energía y las Juntas de Acción Comunal. Esta mesa de trabajo territorial permitiría coordinar acciones de formación, emprendimiento y desarrollo productivo, garantizando continuidad, sostenibilidad y seguimiento técnico a los avances de reconversión económica. La articulación es clave para evitar la fragmentación de esfuerzos y para asegurar que los programas lleguen también a los corregimientos más dispersos.

Otro aspecto prioritario es la necesidad de desarrollar alternativas económicas sostenibles para las personas involucradas en la venta informal de combustibles. Esta práctica, aunque minoritaria, cumple un papel funcional en la movilidad rural, por lo que las alternativas deben ser graduales y respetuosas de las condiciones socioeconómicas de las familias. Entre las opciones se encuentran la reconversión hacia micrologística veredal, el fortalecimiento de tiendas rurales, servicios de movilidad comunitaria regulada, mantenimiento técnico de motocicletas y emprendimientos agroecológicos complementarios. Estas acciones deben ir acompañadas de campañas de seguridad y educación ambiental para reducir los riesgos asociados al manejo de combustibles.

También se recomienda promover la inclusión social y el enfoque diferencial en todas las estrategias implementadas. Las mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad deben participar activamente en los programas de empleo y emprendimiento, garantizando igualdad de oportunidades y pertinencia cultural. En el caso de las mujeres rurales, es indispensable considerar las dificultades de movilidad, la carga de cuidado y la disponibilidad limitada de tiempo, elementos que deben ser contemplados en el diseño de la oferta institucional. Finalmente, se sugiere integrar los hallazgos de esta caracterización en los instrumentos de planificación territorial, como el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. Esto permitirá orientar inversiones hacia sectores estratégicos, mejorar la infraestructura rural, fortalecer la movilidad, ampliar la conectividad digital y garantizar espacios productivos adecuados para la comunidad. Adicionalmente, se recomienda implementar un sistema local de monitoreo y evaluación que permita medir el impacto social, económico y ambiental de los programas implementados, construido de manera participativa con juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias y entidades locales.

En conjunto, estas recomendaciones buscan potenciar las fortalezas existentes en La Unión, cerrar brechas históricas y promover un desarrollo territorial que mejore las



condiciones de vida de la población, reconociendo su diversidad, sus capacidades y su profundo arraigo comunitario.

## REFERENCIAS

Alcaldía Municipal de La Unión. (2020). *Plan de desarrollo municipal 2020–2023: Por la Unión que queremos*. La Unión, Nariño.

Departamento Nacional de Planeación–DNP. (2014). *Ficha municipal de caracterización: Municipio de La Unión, Nariño*. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación.

Gordillo, M. (2018). *Perfil socioeconómico del municipio de La Unión (Nariño) para el desarrollo y la competitividad territorial*. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia.

Universidad de Nariño – Centro de Estudios del Desarrollo Regional (CEDRE). (2024). *Contexto del municipio de La Unión – Nariño*. San Juan de Pasto, Colombia: Universidad de Nariño.